



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 050001-31-05-013-2018-00788-01
Demandante: Sorley Aidee Velásquez Contreras
Demandado: Protección S.A., Johaliz, Hanna Mileth y Viviana Díaz Velásquez
Asunto: Apelación Sentencia
Procedencia: Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión de sobrevivientes compañera permanente

Medellín, julio veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada Protección S.A., respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de mayo de 2022, en el proceso Ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora SORLEY

AIDEE VELÁSQUEZ CONTRERAS en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., JOHALIZ, HANNA MILETH Y VIVIANA DÍAZ VELÁSQUEZ, Radicado 050001-31-05-013-2018-00788-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora SORLEY AIDEE VELÁSQUEZ CONTRERAS, convocó a juicio a PROTECCIÓN S.A., JOHALIZ, HANNA MILETH Y VIVIANA DÍAZ VELÁSQUEZ, pretendiendo se declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, Jhon Díaz Zambrano, a partir del 22 de febrero del 2014, en el 50%, sin perjuicio del acrecimiento cuando las herederas legítimas del causante adquieran la mayoría de edad, todo debidamente indexado.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que la demandante y Jhon Díaz Zambrano, convivieron en unión libre desde el 8 de junio de 1995 hasta el 22 de febrero del 2014, cuando éste fallece, solicitando la pensión de sobrevivencia, la cual le fue negada el 13 de marzo del 2015, bajo el argumento que no convivía con el finado, al momento de la muerte. Por lo anterior, la accionante acudió a la jurisdicción y por providencia del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, del 9 de marzo del 2016, se declaró la unión marital de hecho de la pareja, en los periodos referidos.

Explicó que la pareja procreó tres hijas llamadas Viviana, Johaliz y Hanna Mileth, la primera de ellas mayor de edad y las otras dos, menores de edad, siendo éstas a quienes se les reconoció la pensión de sobrevivientes, en un 33.33% para cada una. La pareja convivió en Barrancabermeja, siendo su

último domicilio en el barrio Santa Isabel, dependiendo la actora del afiliado, apareciendo la reclamante y sus hijas, afiliadas a la EPS Salud Total.

Agregó que se solicitó nuevamente la pensión el 14 de abril del 2016, la cual le fue nuevamente negada el 29 del mismo mes y año, remitiendo a la actora al Juez laboral, para que reclame su derecho pensional.

1.2.- CONTESTACIÓN

PROTECCIÓN S.A. por conducto de apoderada judicial, da respuesta a la demanda, afirmando que no le consta la convivencia que hubiere existido entre el causante y la actora. Explicó que una vez radicada la solicitud de prestación económica, se realizaron las investigaciones para determinar a quién le correspondía el derecho pensional, concluyendo que Viviana, Johaliz y Hanna Mileth Díaz Velásquez, hijas del afiliado, eran las acreedoras del derecho solicitado, además se encontró que la accionante no convivía con el causante al momento de su muerte, ya que el afiliado estaba viviendo con sus familiares, por haberse presentado una separación respecto de su pareja. Precisa que la demandante, al presentar la reclamación, indicó como su dirección de residencia la calle 63 No. 5-61, barrio la Esperanza de Bucaramanga.

En oposición a las pretensiones de la demanda, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa; inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda; buena fe; prescripción; compensación; improcedencia de imposición de condenas accesorias y la innominada o genérica.

Por su parte, **JOHALIZ y VIVIANA DÍAZ VELÁSQUEZ**, por intermedio de apoderado, dieron respuesta a la demanda, aceptando como ciertos todos los hechos de la demanda, sin oponerse a las pretensiones de la misma.

A la menor **HANNA MILETH DÍAZ VELÁSQUEZ**, le fue nombrado curador ad litem, quien no dio respuesta a la demanda, en el término de ley.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 11 de mayo del 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín declaró que la demandante, en calidad de compañera permanente, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, condenando a Protección S.A., a pagar \$41.004.932 como retroactivo de pensión de sobrevivientes, que equivale a una cuota parte del 50%, liquidado desde el 22 de febrero de 2014 al 30 de abril de 2022 y que a partir del 1° de mayo de 2022, Protección S.A. continúe pagando el 50%, sumas que deberán ser indexadas al pago, precisando que la extinción del derecho de alguna de las beneficiarias, acrecerá el de la otra; autorizó los descuentos en salud; condenó a Protección S.A. a disminuir la cuota parte de la pensión de sobrevivientes de Hanna Mileth Díaz Velásquez de un 100% a un 50%, a partir del 1° de mayo de 2022, condenando en costas a Protección S.A.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Protección S.A.

La apoderada de la administradora pensional interpuso el recurso de apelación, tendiente a que se revoque la sentencia, argumentando que el 14 de enero del 2015 la empresa Alianza S.A.S., como tercero investigador de Protección S.A., realizó el análisis de la prestación económica reclamada por la demandante, indicando que el señor Efraín Díaz, hermano del afiliado fallecido, fue claro al indicar que si bien la pareja si tuvo una relación, al momento de fallecer el afiliado no estaban conviviendo hacía más de un año, información ratificada

por la señora Claudia Patricia Jualdrón Díaz, sobrina del afiliado, quien dijo que el causante estaba viviendo con ella para cuando muere, por cuanto la pareja estaba separada. Además, los señores José Velásquez Villar y Juan Carlos Velásquez, compañeros de trabajo del causante, adujeron que la pareja no estaba conviviendo. Así mismo, el señor Juan Antonio Cadavid, afirmó que la pareja estaba separada desde mayo del 2013.

Resaltó que la demandante presentó inconsistencias en su interrogatorio, ya que indicó que convivió con el afiliado hasta el momento de su fallecimiento, que para ese momento vivían en el barrio Santa Isabel, que llevaban ahí 8 años, que su compañero era el encargado de cubrir todos los gastos del hogar, que para el 2014 ella era afiliada en la EPS por su pareja, que el mismo laboraba en Coca Cola y no tenía un salario fijo; al preguntarle sobre la dirección calle 63 # 5-61 dijo no conocerla, que la dirección donde vivía era en la calle 32 sin precisar nomenclatura.

En cuanto a la relación con Efraín y Claudia Patricia, dijo que era buena y no tenía inconvenientes con ellos, testigos que en las investigaciones administrativas declararon de manera libre que, para el momento del deceso, la actora y el causante no vivían juntos.

Anotó que el testigo Juan manifestó que la pareja convivió hasta el 2014, pero en la investigación adujo que llevaban 1 año separados, indicando que no era cierta la información plasmada en la investigación, por cuanto nunca recibió una llamada por parte de Protección, sin embargo, es el hermano de la actora y tiene un interés en las results del proceso; agregó que al número telefónico que reposa en la investigación administrativa, si bien le falta un número, pertenece a él, no entendiendo porqué Alianza como tercero investigador, sacaría esa información de la nada. De igual forma, se le preguntó por la dirección calle 63 # 5-61 indicando que es de su madre, lo que evidencia

la inconsistencia de la actora al no reconocer esta dirección. Agregó que la señora Claudia Patricia le indicó al Despacho que no recordaba la declaración rendida en la investigación, no entendiendo porque en ese momento informó algo y ahora viene al Despacho a cambiar su declaración.

Considera que quedó acreditado que la demandante no convivía con su compañero para el momento de su fallecimiento. Solicita la revocatoria del retroactivo pensional, pues considera no puede desconocerse que la mesada fue reconocida en el 100% a las beneficiarias de ley que en su momento así lo acreditaron, no pudiendo pagarse doblemente dichas sumas, además, la AFP no ha tenido la posibilidad de revisar dicha liquidación, debiendo ser las hijas de la actora, las que le paguen las mesadas desde el 22 de febrero del 2014, por cuanto esto atentaría contra el principio de la sostenibilidad financiera.

Finaliza la sustentación del recurso expresando que la a quo no autorizó a Protección S.A. a efectuar un recobro a las demás beneficiarias de la prestación, no pudiendo desautorizarse a la entidad para hacer cobros que son legales. Además, no puede condenarse a la indexación, por cuanto las cuentas de los afiliados se mantienen actualizadas, así mismo pide se revoque la condena en costas, ya que el actuar de la entidad ha estado ajustado a la ley.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de la demandante y de Protección S.A. El apoderado de la actora, solicita se confirme la providencia, por considerar que su representada logró acreditar la convivencia con el causante, en los términos exigidos por la ley.

Por su parte, la apoderada de Protección S.A., reiteró lo indicado al momento de apelar la providencia, haciendo hincapié en el contenido de la investigación administrativa ordenada por su representada, concretamente en los dichos de los señores Efraín Díaz León, Claudia Patricia Jualdrón Díaz, José Velásquez Villar, Juan Carlos Velásquez Martínez y Juan Antonio Cadavid.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Jhon Díaz Zambrano, falleció el 22 de febrero del 2014, tal y como se desprende de la copia del registro civil de defunción obrante en el documento *01. Demanda.pdf folio 15* del plenario.
- Que el causante y la demandante procrearon tres hijas llamadas Viviana, Johaliz y Hanna Mileth, quienes nacieron el 27 de octubre de 1996, 2 de octubre del 2001 y el 14 de junio del 2008, respectivamente, tal y como se

evidencia en los registros de nacimiento obrantes en el documento 01. *Demanda.pdf folios 21, 24 y 28* del plenario.

- Que la actora y sus 3 hijas eran beneficiarias en salud del actor, tal y como se desprende del certificado de Salud Total, fechado el 4 de agosto del 2014 –ver documento 01. *Demanda.pdf folio 40* del plenario-.

- Que, por escrito del 13 de marzo del 2015, Protección S.A., le reconoció la pensión de sobrevivencia a Viviana Díaz Velásquez, en calidad de hija mayor de edad, acreditando la calidad de estudiante y en favor de Johaliz y Hanna Mileth Díaz Velásquez, en condición de hijas menores, correspondiéndole a cada una el 33.33% del beneficio pensional. Se agregó que no procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia a la señora Sorley Aidee Velásquez Contreras, toda vez que no convivía con el afiliado al momento del fallecimiento –ver documento 01. *Demanda.pdf folios 41 a 44* del plenario.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, determinando para el efecto si la señora Sorley Aidee Velásquez Contreras, acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia causada con ocasión del fallecimiento del señor Jhon Díaz Zambrano, ocurrido el 22 de febrero del 2014?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, no acreditó la demandante, su calidad de compañera permanente respecto del

causante, al no probar la convivencia con el mismo, para el momento de su fallecimiento. En consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

Como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente a la fecha del óbito del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 Jun 2009, SL 42828 del 1º Feb 2011, SL 7358 (46780) del 23 jun 2014 y más recientemente la sentencia SL 529 de 2021.

El artículo 13 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha del fallecimiento del señor Jhon Díaz Zambrano, establece los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, así:

ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).”

2.6.- CASO CONCRETO

En el sublite, no hay controversia en torno a la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, en tanto que Protección S.A., reconoció la misma en favor de las hijas del asegurado, Viviana, Johaliz y Hanna Mileth Díaz Velásquez, siendo el punto neural de discusión, determinar si la actora, ostentaba la calidad de compañera permanente del causante.

Al respecto, se tiene que la demandante tiene la carga probatoria de acreditar tal condición y la convivencia efectiva, en un periodo mínimo de cinco años con anterioridad a la muerte del señor Jhon Díaz Zambrano, recordando que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la Sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018 (45779), definió la convivencia así:

“2.1 La noción de convivencia

...Por convivencia ha entendido la Corte que es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605).”

Para desatar el recurso de apelación, luego del estudio de los distintos medios de prueba obrantes en el plenario, este Juez Plural, se aparta de la decisión adoptada por la falladora de primera instancia, en tanto que al contrastar la prueba documental y la testimonial, bajo el lente de las reglas de la experiencia y la sana crítica, no se llega al convencimiento de la vigencia de la convivencia de la pareja Díaz Velásquez para la fecha del fallecimiento del causante, por las siguientes razones:

En primer lugar, el extremo activo presentó como único testigo al señor JUAN ANTONIO CADAVID CONTRERAS, hermano de la demandante, quien declaró que su hermana y el causante, convivieron por 19 años, de 1995 al 2014, afirmando que la pareja nunca se separó, que se encontraban cada 8 días en la casa de su madre y que los visitaba semanalmente. En cuanto al fallecimiento de su cuñado, adujo que se dio en la clínica y que su hermana fue quien lo llevó.

No obstante, la prueba documental acredita que, en llamada telefónica realizada por Protección en el procedimiento de análisis de la investigación administrativa, –ver documento 01. *Demanda.pdf folios 241 a 242* del plenario-el mismo testigo afirmó que conoce a la actora desde hacía 15 años, cree que el causante y la demandante convivieron por más de 18 años, pues la hija mayor tiene como 18 años, afirmó que hacían buena pareja y como todos tenían inconvenientes personales, creyendo que el asegurado estaba viviendo en la casa de una prima para el momento de la muerte, pero estaban nuevamente en conversaciones para vivir juntos con las niñas.

Ahora, el declarante niega la llamada referida, indicando que el número de celular que está plasmado como si fuere suyo, le falta un número, siendo 5012 y no 012, precisando que no fue contactado por Protección, por lo que no reconoce el contenido del documento.

Protección S.A., por su parte, aportó el testimonio de la señora CLAUDIA PATRICIA JUALDRÓN DÍAZ, sobrina del causante, quien aseveró que la demandante y su tío se conocieron en 1995, comenzaron a convivir y lo hicieron hasta que él murió, sin llegar a separarse. Narró que fue ella quien llevó a su tío a la clínica, ya que cuando él se sintió enfermo, se fue para la casa de ella porque Sorley estaba trabajando, pero que, estando en la clínica, ella llamó a la actora y se fue de inmediato para allá.

Empero en la investigación administrativa realizada por ALIANZA S.A. ver documento *01. Demanda.pdf folios 229 a 233* del plenario-, la misma declarante adujo que el causante estaba viviendo con ella en su casa, que estaba allí desde mayo del 2013, que esto se dio porque tuvo un problema con su pareja, pero iba frecuentemente a la casa a llevarle dinero para los gastos de las niñas; que el causante convivió con la demandante por más de 18 años. Informó que Jhon ayudaba económicamente a su abuela quien vive en la costa, le enviaba \$80.000 o \$100.000, se los enviaba por Servientrega o por Cotaxi, siendo ella la encargada de esos envíos

Al igual que el testigo anterior, la declarante niega el contenido de la investigación administrativa en lo respecta a su declaración, explicando que la única diligencia que hizo ante Protección S.A. y que la hubieran llamado, fue por los gastos fúnebres de su tío, afirmando que no la llamaron para nada de la pensión, no recordando nada de eso. Informó que su abuela, Agustina Zambrano de Díaz, dependía del afiliado, por lo que preguntó en el fondo si podría obtener algo de la pensión de su tío, procediendo a solicitarle recibos y cosas que ella no tenía, por lo que dejó todo quieto, porque sabe que las que más derechos tenían eran la demandante y sus hijas.

Ahora bien, en virtud del principio de libre valoración de la prueba, para la Sala no tiene credibilidad la explicación de los declarantes, en tanto, no existe ninguna razón lógica para que, en su orden la investigadora de Alianza S.A. y Protección S.A. hubieran incurrido en una falsedad en la investigación y en el documento de análisis de la misma, siendo evidente que respecto al señor Juan Antonio Cadavid, se presentó un error en escribir el número telefónico lo cual no implica que la entrevista no se haya cumplido.

En ilación con lo anterior y como bien lo argumenta a la apoderada recurrente, la información que se consigna en ambas entrevistas resultan concordantes con situaciones familiares acreditadas y no es posible razonablemente considerar que provengan de la imaginación, resaltando que es concordante

la información referente al tiempo de convivencia, el número de hijas, el sostenimiento del hogar, el aporte a la madre del causante, entre otros aspectos, siendo solo el hecho de la separación para el momento de la muerte el que configura la disparidad en la versión.

Frente a estas entrevistas, se recuerda que las mismas tienen el carácter de documentos declarativos de terceros, conforme al artículo 262 del Código General del Proceso “*Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.*”; en atención a ellos, deben ser valoradas en el conjunto probatorio, como lo sostuvo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia radicación 43212, del 15 de mayo de 2012:

“... se ha de precisar en primer término que la jurisprudencia de la Sala tiene definido el criterio de que los informes que recogen las investigaciones efectuadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica para discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, deben tenerse como “documento declarativo emanado de terceros”, cuya valoración se hace en forma similar al testimonio (...).”

En esta dirección la investigación administrativa es una prueba documental emanada de un tercero, que puede ser válidamente apreciada, como lo iteró la Sala Laboral de misma Corporación en sentencia SL250 de 2020

“Adicionalmente, cumple resaltar que de acuerdo con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces a la hora de dirimir los asuntos a su cargo gozan de libertad para formar su convencimiento, de modo que no están sujetos a tarifa legal y podrán asignarles mayor valor a unas pruebas en desmedro de otras, siempre que dicho ejercicio resulte razonable. En el caso examinado, resulta razonable que el Tribunal le confiriera mayor valor a la investigación administrativa que a la prueba testimonial, pues la primera emana de la parte y, además, entra en

contradicción con lo dicho por los testigos en cuanto a la duración, el domicilio y exclusividad de la convivencia. Todo lo anterior, resulta suficiente para concluir, como en efecto lo hizo el Tribunal, que la vida en común con el pensionado no fue acreditada.”

No evidenciando en este caso elementos que permitan concluir que Alianza S.A. incurrió en falsedad ideológica en el informe, el cual, si bien, como lo advirtió la a quo, omite relacionar la cédula de ciudadanía de algunos declarantes, tal omisión no tiene la entidad suficiente para restarle valor probatorio.

En segundo lugar, respecto a la declaración de las señoras JAJANY PAOLA VELÁSQUEZ CONTRERAS y ANA FELISA MORENO, testigos de las hijas del causante, debe señalarse que la primera, tal y como lo anotó la a quo, no puede ser valorada, por cuanto estuvo presente en toda la diligencia, con la joven Viviana Díaz Velásquez, escuchando el interrogatorio rendido por la demandante y la declaración del testigo presentado por la misma, faltando a la verdad, por cuanto en respuesta a requerimiento de la Juez, indicó que apenas había llegado a la diligencia, pero de la grabación de la misma, se alcanza a evidenciar su presencia de tiempo atrás.

Y la señora ANA FELISA MORENO, vecina de la mamá de la solicitante, no cuenta con un real conocimiento de la convivencia, ya que, pese a indicar que conocía a la demandante y al causante desde el año de 1998, solo los visitó en tres oportunidades, afirmando que los veía desde su casa, cuando toda la familia se reunía en la casa materna los fines de semana.

En tercer lugar, de la prueba documental que obra en el plenario, no se deduce la convivencia para el momento de la muerte, pues si bien se aportó sentencia del 9 de marzo del 2016, del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, en la cual se declaró la existencia de la unión marital de hecho entre los señores Sorley Aidee Velásquez Contreras y el causante Jhon Díaz Zambrano, entre el 8 de junio de 1995 hasta el 22 de febrero del 2014 –

ver documento 01. *Demanda.pdf folios 31 a 33* del plenario, la misma no es vinculante para el juez ordinario laboral, constituyendo una prueba que debe ser valorada en conjunto con las demás pruebas aportadas al proceso.

Observando que la decisión del juez de familia, se sustenta declaraciones extra proceso rendidas por los señores Ediber Antonio Cabrera Mejía, Zuleyma Rengifo Castro y Sor Fanny Caro Jiménez, en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Barrancabermeja, el 10 de octubre y el 13 de noviembre del 2014, que corresponde a un formato idéntico, en el cual se consigna que conocen a la demandante desde hacía 16, 15 y 19 años, respectivamente, quien convivió con el causante por 19 años de manera ininterrumpida hasta el día de su muerte, procreando 3 hijas, dependiendo la actora de su compañero permanente –ver documento 01. *Demanda.pdf folios 34 a 35 y 38 a 39* del plenario-, y no aporta elementos probatorios sobre la forma en que se cumple la convivencia.

De otra parte, aunque el informe de la investigación administrativa, fechado el 14 de enero del 2015, rendido por Alianza S.A. al cual se hizo antes referencia, da cuenta que se entrevistó, además de la sobrina del causante, a las señoras ANA FELISA MORENO URGUIZA, LIZETH MELISSA RUÍZ MORENO, LUCY MILENA CASTRO, ÉRIKA PAOLA DOMÍNGUEZ, MARTHA CECILIA PÉREZ, quienes afirmaron que la pareja convivió durante 19 y 20 años en forma ininterrumpida y al señor RODOLFO ROMERO PÁEZ, compañero de trabajo del causante por 3 años, quien adujo que el afiliado convivía con la demandante desde hacía mucho tiempo, no puede desconocerse que también se entrevistó al señor EFRAÍN DÍAZ LEÓN, primo del afiliado, quien afirmó que la pareja convivió por 20 años, pero tuvieron un problema y llevaban casi un año separados, que se estaban reconciliando, buscaban casa para volver, pero que se veían frecuentemente y el afiliado les daba el dinero para los gastos.

En este mismo sentido el señor JOSÉ VELÁSQUEZ VILLAR, quien fue compañero de trabajo del afiliado durante 4 años, al ser entrevistado afirmó que el asegurado tenía pareja, pero no la conoció, que cuando falleció al parecer no vivía con su ella.

Asimismo, en el documento “Análisis de investigación”, fechado el 23 de febrero del 2015, Protección reporta de confirmación telefónica con el señor Juan Carlos Velásquez Martínez, amigo de la pareja desde hacía 20 años, quien declaró que sabe que vivieron juntos por 19 años, que eran una pareja bonita, pero con bastantes diferencias, teniendo entendido que llevaban unos meses separados por problemas, cree que el causante vivía con una prima

Estas últimas declaraciones coinciden con las inicialmente dadas por los señores JUAN ANTONIO CADAVID CONTRERAS, hermano de la demandante y CLAUDIA PATRICIA JUALDRÓN DÍAZ, sobrina del causante, lo que reafirma el carácter inverosímil de la versión que éstos dan en el proceso, de no haber rendido nunca entrevista a Protección S.A. y/o Alianza S.A.

Ahora tiene importancia para la Sala, en la libre valoración de la prueba, que sean las personas de la familia, quienes acreditan una mayor cercanía al núcleo familiar, las que refieran la separación de la pareja para el momento del fallecimiento del causante, mientras las personas externas, vecinas y amigas, sostengan que la pareja nunca se separó.

En este contexto, no se demostró la convivencia para el momento de la muerte del causante, amen a que la comunidad de vida singular y permanente es la que permite predicar la vigencia de la calidad de compañera permanente de la demandante y por ende beneficiaria de la prestación, de manera que no resulta suficiente que en la pareja hubiese persistido los vínculos de solidaridad, apoyo mutuo y ánimo de reconciliación, en tanto desapareció la comunidad de vida.

En adición a ello, no se planteó en el proceso que se tratara de una separación forzada por circunstancias de fuerza mayor, las cuales es claro que no interrumpen la cohabitación, pues la tesis de la activa es que nunca hubo separación, considerando este juez plural que la interrupción de la convivencia por un lapso 10 a 12 meses, no puede ser considerada intrascendente.

Por todas estas razones, hay lugar a acoger el planteamiento del alzado, y en consecuencia decisión tomada por la juzgadora primaria debe ser REVOCADA.

Costas en ambas instancias a cargo de la demandante.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1.- Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de mayo del 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora SORLEY AIDEE VELÁSQUEZ CONTRERAS en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., JOHALIZ, HANNA MILETH Y VIVIANA DÍAZ VELÁSQUEZ y en su lugar se ABSUELVE a PROTECCION S.A. de las pretensiones invocadas por la accionante.

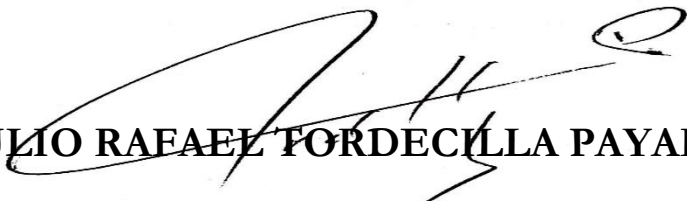
2.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandante.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO